

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 09 MAR 2020

Auto Interlocutorio nro. 72

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - OTROS
EXPEDIENTE:	76001-23-33-009-2017-1423-00
DEMANDANTE:	COLPENSIONES
DEMANDADO:	MANUEL ESTEBAN MONTAÑO CANDELO
ASUNTO	REMITE POR COMPETENCIA

Mediante auto de sustanciación nro. 256 del 18 de junio de 2019<sup>1</sup>, esta Corporación inadmitió la presente demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, concediendo a la parte actora el término de diez (10) días para subsanar los efectos señalados respecto a la estimación razonada de la cuantía; posteriormente mediante escrito allegado el 4 de julio de 2019<sup>2</sup>, dentro del término otorgado el apoderado judicial presentó escrito de subsanación de demanda.

Respecto a la estimación de la cuantía, el Consejo de Estado<sup>3</sup> ha recordado que la fijación de los perjuicios causados tiene como finalidad determinar quién es el juez competente para conocer de un determinado proceso. Sobre el particular, ha expresado que:

*“Cuando en la demanda se formulen varias pretensiones, la cuantía del proceso se determinará por el monto de la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes. Así, se tiene que los perjuicios por daño moral, daño emergente y lucro cesante son pretensiones autónomas entre sí y respecto de cada demandante, por lo tanto no se pueden sumar para efectos de determinar la cuantía de las pretensiones formuladas por cada uno de ellos”<sup>4</sup>. (Subrayas por fuera de texto).*

Al momento de estudiar la competencia funcional se debe analizar de manera individual cada una de las pretensiones y así determinar si es dable admitir o no la demanda.

El numeral 6 del artículo 155 del CPACA establece lo siguiente:

**“Art. 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:  
(...)”

<sup>1</sup> Ver folios 20 y 21

<sup>2</sup> Ver folios 22 a 24

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, C.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, providencia 19 de febrero de 2019, Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00197-00(62962).

<sup>4</sup> Consejo de Estado, auto de 28 de marzo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En igual sentido se ha pronunciado el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E) en auto de 2 de mayo de 2016.



**2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.**

Ahora bien el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 establece:

**“Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía.** Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

(...)

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.” (Subrayas por fuera de texto)

En el presente caso, la parte demandante reclama la devolución de la diferencia pagada por el reconocimiento de la pensión de vejez de carácter compartida al señor Manuel Esteban Montaña Cándelo, para tal efecto en el escrito de subsanación estableció que al versar el asunto sobre prestaciones periódicas de término indefinido, la cuantía debía establecerse teniendo en cuenta solo los últimos tres años, así:

- Valor pensión de vejez incorrecta al año 2016: \$2.237.247 (Conforme a la Resolución nro. GNR 379098 del 13 de diciembre de 2016).
- Valor correcto por mesada pensional al año 2016: \$2.210.966 (Conforme a la Resolución nro. GNR 379098 del 13 de diciembre de 2016).
- Número de meses: 36
- Diferencia pensional: \$26.281
- \$26.281.00 x 36 meses: **\$946.116.00**

En virtud de lo anterior, es evidente que la cuantía para el presente asunto corresponde a \$946.116.00, la cual resulta inferior a los 50<sup>5</sup> SMLMV, por lo que debe darse aplicación al numeral 2 del artículo 155 del CPACA y la

<sup>5</sup> Salario mínimo 2019 (\$828.116 \* 50 = \$41.405.800)

Radicación  
Medio de control  
Demandante  
Demandado

2017-01423-00  
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - OTROS  
COLPENSIONES  
MANUEL ESTEBAN MONTAÑO CANDELO



3

competencia para conocer en primera instancia el presente asunto radica en los juzgados administrativos de Buenaventura.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168<sup>6</sup> del CPACA se ordenará remitir el expediente por competencia al Juez Administrativo del Circuito de Buenaventura – Reparto, quien deberá observar el inciso tercero del artículo 139<sup>7</sup> del CGP aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>8</sup> del CPACA.

En consecuencia,

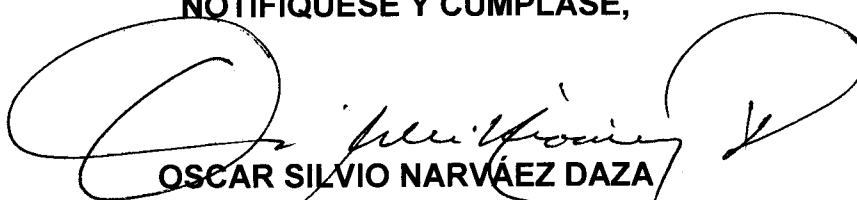
### RESUELVE:

**PRIMERO.- DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA** en razón de la cuantía para tramitar el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

**SEGUNDO.- REMITIR** por competencia en razón a la cuantía el presente medio de control a los Juzgados Administrativos Orales de Buenaventura - Reparto, quien deberá atender lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 139 del Código General del Proceso.

**TERCERO.-** Por Secretaría de esta Corporación realizar las anotaciones pertinentes en el sistema Justicia Siglo XXI.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
**OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA**  
Magistrado

Dir. Vicaría Legal  
Vice-Secretario

<sup>6</sup> ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión

<sup>7</sup> ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. (subrayas fuera de texto).

<sup>8</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.